



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: SAMUEL OVIDIO ARROYAVE OSORIO
Demandados: ACP COLPENSIONES, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO Y LA AFP PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 010 2020 00294 01
Sentencia: S-282

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los **recursos de apelación** interpuestos por la **ACP COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCIÓN S.A.**, al igual que el grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de **Colpensiones**, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 8 de mayo de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

SAMUEL ARROYAVE OSORIO demandó a COLPENSIONES, a PROTECCIÓN S.A. y al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, pretendiendo se declare la ineficacia, nulidad o inexistencia del traslado del RPM al RAIS, debiendo volver todas las cosas al estado en el que se encontraban.

En consecuencia, pretende se condene a PROTECCIÓN S.A. a entregar a COLPENSIONES el valor de todos los aportes recibidos por la afiliación, y que es nulo, ineficaz o inexistente cualquier reconocimiento prestacional que haya realizado o llegue a realizar la AFP; asimismo, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anule la emisión del bono realizada a favor de PROTECCIÓN y en su lugar retornen los dineros a COLPENSIONES, entidad esta última que deberá tenerlo como afiliado sin solución de continuidad, igualmente debe cobrar o recibir los valores depositados en la cuenta de ahorro, como también realizar el computo de las semanas cotizadas por toda su vida laboral, debiendo devolverse todos los valores indexados y el pago de los intereses moratorios. Finalmente pretende se condene en costas a las demandas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 21 de abril de 1965 y que ha laborado para distintos empleadores; que realizó aportes al RPM a través del ISS, hoy COLPENSIONES; posteriormente se trasladó al RAIS a la AFP PROTECCION S.A.; que los asesores del fondo privado no lo asesoraron de forma adecuada, pues no le explicaron las características de cada uno de los regímenes, ni los requisitos o formas para acceder a la pensión en ningún régimen, así como tampoco le explicaron cómo funcionaba el RPM; tampoco se le realizó un comparativo o proyección pensional de los regímenes, o que debía castigar el bono pensional si su deseo era pensionarse antes de los 60 años; que no se le informó de su derecho de retracto, ni de la prohibición de ley de los 10 años o menos, entre otros; que se le informó que en el RAIS podría pensionarse en cualquier momento, en

el momento que quisiera y que el ISS iba a quebrar perdiendo sus ahorros; que el 23 de julio de 2020 presentó derecho de petición ante Protección S.A. solicitando una serie de documentos y la proyección pensional en ambos regímenes; e indica que su mesada pensional en el RPM sería muy superior a la que recibiría en el RAIS.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación al ISS, el traslado al RAIS y la reclamación administrativa; sobre los demás hechos indica que no le constan por no tener participación ni injerencia y que los demás son apreciaciones subjetivas del apoderado. Se opuso a todas las pretensiones. Como excepciones propuso inexistencia de la nulidad o ineficacia del traslado de régimen, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. en su contestación expone que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, su vinculación laboral con distintas entidades, las cotizaciones realizadas en esos tiempos al ISS, como su traslado al RAIS a la AFP PROTECCIÓN S.A.; que al momento de la solicitud de traslado se le brindó una asesoría amplia, suficiente de las condiciones del RAIS, características, comparativos de ambos regímenes, los requisitos para alcanzar la pensión, la posibilidad de elección la modalidad de pensión, y que los dos regímenes son excluyentes; que se le explicó sobre la negociación del bono pensional y se le dio a conocer la posibilidad de regresar al RPM; que nunca se le manifestó que el ISS iba a terminar; y que son ciertas la reclamación administrativa y el derecho de petición a PROTECCIÓN. Se opuso a todas las pretensiones, toda vez que se está frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos,

innominadas e inexistencia de la obligación de devolver comisión de administración y seguro previsional.

El MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO manifestó que es cierta la fecha de nacimiento del demandante; expone en cuanto a las cotizaciones durante esos periodos laborales, que es parcialmente cierto, pues se atiene al contenido de la historia laboral; es cierta la afiliación a PROTECCION S.A.; sobre los demás hechos manifestó que no le constan, toda vez que no corresponden a acciones, omisiones, ni competencias legales de este Ministerio. Se opuso a las pretensiones en contra del Ministerio. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, saneamiento de los vicios del consentimiento, imposibilidad de trasladar el bono redimido a Colpensiones y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 8 de mayo de 2023, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** ineficaz el cambio de régimen pensional realizado del RPM al RAIS, y en consecuencia declaró que el actor permaneció afiliado al RPM sin solución de continuidad; **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, a COLPENSIONES el saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, frutos e intereses. Asimismo, y con la respectiva indexación, los descuentos realizados por concepto de Fondo de Garantía de Pensión Mínima, gastos de administración y el valor de las primas de los seguros previsionales y reaseguro. Y que al momento de cumplirse la orden los conceptos deberán aparecer discriminados con respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante; **CONDENÓ** a COLPENSIONES a que reciba de PROTECCIÓN S.A. los valores aludidos e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral del actor, imputándolos a los períodos en que fueron cotizados en el RAIS y de acuerdo al IBC que fueron aportados, que deberán de tenerse

como semanas válidamente cotizadas para el futuro reconocimiento de las prestaciones económicas que lleguen a causarse en el sistema de protección social. **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación buscando se revoque la sentencia, pues insiste que la afiliación efectuada por el demandante goza de plena validez, ya que al momento que se trasladó del régimen estaba aceptando sus condiciones pensionales, incumbiéndole a la parte que afirma, demostrar los hechos en que sustenta su demanda, y si bien esto varía con la institución de la carga dinámica de la prueba, no significa que la parte actora tome una actitud pasiva en el debate probatorio; que si la sentencia sale favorable a los intereses del demandante viola la Constitución Política y el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones consagrado en el artículo 48 de la constitución; y en el caso de que se confirme la sentencia, se ordene al fondo privado a trasladar todo el saldo de la cuenta ahorro individual sin ningún tipo de descuentos y debidamente indexados.

PROTECCIÓN S.A interpuso recurso de apelación de manera parcial respecto de la orden que se le dio de retornar las sumas del reaseguro, pues debe tenerse en cuenta que éstos no existen en los cobros realizados por PROTECCIÓN como gastos de administración, toda vez que el reaseguro es un contrato mediante el cual una compañía aseguradora pasa a ser un asegurado de otra entidad aseguradora o reaseguradora, es decir estamos ante una figura muy distinta a la establecida en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, que fija que tanto en el RPM como en el RAIS, el 3% del IBC de los afiliados al sistema general de pensiones se destina a pagar la comisión de administración y el seguro previsional, en nada se menciona el tema de un reaseguro.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término del traslado concedido a las partes, COLPENSIONES, señaló que se debe revocar la sentencia, ya que el demandante está dentro de la prohibición legal establecida en el consagrada en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 2 de la Ley 797 de 2003, y además el demandante nunca demostró por ningún medio probatorio que ejerció de manera oportuna las acciones jurídicas tendientes a regresar al Régimen de Prima Media. Y que en caso de que se confirme la sentencia se trasladen todos los conceptos debidamente actualizados.

Por su parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los alegatos dijo que, la Emisión y Redención (Pago) del Bono Pensional tipo A del accionante solo tendrá lugar en derecho si el demandante continúa afiliado al RAIS y en consecuencia cuando la AFP Protección S.A., se encuentre debidamente autorizada por su afiliado, mediante la aprobación de la Liquidación Provisional. Como complemento de lo anterior, dice que si se decide confirmar la decisión del Juzgado Décimo Laboral del Circuito Medellín - Antioquia, esto es, que el demandante deba permanecer como afiliado de Colpensiones, esta última, es la entidad competente para determinar la prestación (pensión o indemnización sustitutiva) y quien determinara si para la financiación de dicha prestación requiere o no de Bono Pensional (Tipo B o T nunca Tipo "A").

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** el Sr. SAMUEL OVIDIO ARROYAVE OSORIO nació el 21 de abril de 1965; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones allí, el día 12 de diciembre de 1991¹; **iii)** y que el 20 de abril de 2006 suscribió formulario de vinculación ante la AFP PROTECCIÓN S.A.², entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

¹ Folio 26 de la Historia Laboral del PDF 08

² Folio 30 del PDF 08 Historia Laboral.

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de

múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y

- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, se encontraba laborando como supervisor en Fabricato-Tejicondor, cuando llegaron los asesores de Protección S.A. con los formularios pre diligenciados, en donde le manifestaron que el personal debía pasarse de fondo, sin mediar algún tipo de asesoría, como tampoco ningún tipo de información, trasladándose por presión de la empresa debido a que sino firmaban sería desvinculado de la empresa, ya que esta pertenece al Grupo G.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora. No es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por

administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Sin que tampoco sea de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PROTECCIÓN S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en

sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Se advierte igualmente que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva **indexación**, tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, la Alta Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en la sentencia SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que

concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que “... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”

Debe manifestar la Sala en cuanto a la inconformidad de PROTECCIÓN S.A. relacionado con la improcedencia del traslado a COLPENSIONES de los **reaseguros**, la cual se debe entender como la prima de reaseguros de Fogafín, esto es, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, tal y como lo consagra el inciso tercero del artículo 20 de la ley 100 de 1993, que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-755-2022, aclaró que, si bien el artículo 163 de la ley 1450 de 2011 eliminó este seguro a cargo de los fondos privados, éste concepto deberá trasladarse hasta antes de su derogatoria o hasta el momento en que se realizó dicho descuento, ello a raíz de que el demandante estuvo vinculada con PROTECCIÓN S.A. desde el año 2006; por lo anterior, será **PRECISADA** la sentencia en tal sentido.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y PRECISADA**.

Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES y en favor del demandante, por no salir avante su apelación, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 8 de mayo de 2023. Y la **PRECISA** en el sentido que, lo correspondiente a la prima de reaseguros Fogafín - Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- deberá trasladarse por la AFP demandada a COLPENSIONES hasta el momento en que se realizó dicho descuento, pues el demandante estuvo vinculado con PROTECCIÓN S.A. desde el año 2006.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **95f199f94585dc5be49a894787a2bb658b84ec5ffeef4d9c0373275d45fbb52a**

Documento generado en 20/10/2023 03:50:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>